

## EDITORIAL

# LA POLITICA DEL GOBIERNO Y EL MOVIMIENTO LABORAL

Luego de más de 5 años de guerra y crisis generalizada en nuestro país, aún no se presentan señales de recuperación, ni siquiera de haber tocado fondo en la acelerada caída en todos los planos del acontecer nacional. En la medida en que continúa el deterioro, sus efectos se hacen sentir en los diferentes sectores económicos y sociales del país, aunque con diferentes grados de intensidad y peligrosidad en cada uno de ellos, adquiriendo verdadero dramatismo en los sectores populares, tradicionalmente marginados de los frutos del crecimiento económico, no así de la cuota de sacrificio que hay que aportar en época de crisis.

De diversas formas y con diferentes cuotas de poder e influencia, tanto los trabajadores, como los cafetaleros, algodoneros, industriales, transportistas, etc., plantean sus necesidades y exigen la atención del gobierno para su adecuada satisfacción. La actuación y respuesta del gobierno a las demandas de los diferentes sectores refleja el orden de prioridades establecido para la asignación de los cada vez más escasos recursos de la nación.

Ciertamente, ese orden de prioridades no ha cambiado en los últimos años y todo parece indicar que seguirá siendo el mismo, al menos mientras dure la gestión demócrata cristiana al frente del gobierno. Esto se aprecia con bastante claridad en el discurso del Ingeniero Duarte al cumplir su primer año de gestión, en el que reitera su disposición a continuar financiando la guerra, señalando que la mitad del presupuesto nacional tiene ese objetivo, e incentivando al sector privado. Se ofrecen 1,600 millones de colones en líneas de crédito para la empresa privada, y otros incentivos; se aumen-

ta en 10 colones el precio de garantía para el café y se ofrecen alrededor de 600 millones de colones en financiamiento y actualización de deudas, estos últimos a una tasa de interés más bien simbólica del 6% y a doce años de plazo para su amortización, además de otros incentivos para la caficultura nacional y demás productos de agroexportación. Esto se suma a todos los beneficios ya otorgados por el gobierno al sector privado, meses atrás.

La atención del gobierno a las necesidades de los empresarios contrasta notablemente con su respuesta a las demandas del sector laboral, a pesar de lo perentorio de sus necesidades y de que los recursos que absorbería su satisfacción son muchísimo menores que los requeridos por el sector privado.

La falta de respuesta adecuada del gobierno a las demandas de los trabajadores y el constante aumento en el costo de la vida, ha conducido a una reactivación del movimiento laboral y a la intensificación de las huelgas como mecanismos de presión, particularmente durante el mes de mayo; destacándose en este sentido los movimientos impulsados por los trabajadores de ANDA, Seguro Social y ANDES; los dos primeros han mantenido paros de labores ininterrumpidos durante casi un mes, en demanda de incrementos salariales, cumplimiento del contrato colectivo de trabajo y otras prestaciones, así como de la destitución de algunos mandos administrativos señalados como corruptos por los trabajadores. Ante estas demandas el gobierno ha respondido que no cuenta con recursos para satisfacer los incrementos salariales solicitados y que, en caso de acceder a esas demandas, tendría que recurrir a aumentar los impuestos para solventar sus compromisos; de tal manera que la situación de los trabajadores, si se concedieran los aumentos, en el mejor de los casos permanecería igual, ya que por un lado aumentaría su ingreso disponible con el ajuste salarial y, por otro, se sustraería ese ingreso con una mayor carga impositiva; además de que el proceso inflacionario, según el gobierno, se agudizaría con el aumento de salarios, elevando aún más el costo de la vida. Además de eso, se ha recurrido a la implementación del decreto 296, que declara ilegal toda huelga de empleados estatales y de instituciones autónomas, se establecen cordones policiales alrededor de los centros de trabajo en conflicto y se señala a los sindicatos de obedecer consignas del FMLN y de que sus demandas son de carácter político y no laboral.

Bien pudiera ser que el desarrollo de las luchas reivindicativas, y el grado de madurez con ellas alcanzado, haga que los trabajadores trasciendan de lo meramente laboral al plano político; sin embargo, si no existieran las condiciones objetivas que lo posibilitaran, tal cosa no fructificaría. Esas condiciones objetivas se manifiestan en el alto costo de la vida y la ausencia de salarios adecuados para sufragarlo, que pone en grave peligro la sobrevivencia de los trabajadores y su familia; se manifiesta también en la restricción de las libertades ciudadanas, en el marginamiento de las mayorías populares y la atención prioritaria a los detentadores tradicionales del poder económico y político; en general, esas condiciones se conti-

núan presentando y agudizando en la medida en que se recurre a las tácticas y actitudes del pasado que nos condujeron a este presente.

A pesar de que no se cuenta formalmente con un plan económico, que se esperaba sería anunciado el 1o. de junio pasado, el discurso del Presidente de la República, con motivo de celebrar su primer año de gobierno, refleja su disposición a continuar en esa misma línea. Tal actitud del gobierno, ahora que el PDC ha consolidado su poder formal, pudiera significar dos cosas: una, que el actual gobierno, al igual que sus predecesores, continúa creyendo que beneficiando al sector privado, como en el pasado, se logrará el bienestar social, que los frutos del crecimiento económico alcanzarán a las mayorías populares y mejorarán sus condiciones de vida, y que, mientras tanto, es necesario el "sacrificio" del pueblo; tesis que ya ha sido negada por la experiencia pasada. Esta actitud también pudiera significar el precio de ganarse la aceptación del sector privado, que tan duramente ha criticado al gobierno y que ahora parece estar más dispuesto a convivir con él; lo que, de ser cierto, confirmaría la tesis de que el triunfo del PDC en las elecciones de marzo no significó la consolidación de su poder real. Todo lo cual estaría en consonancia con la estrategia norteamericana que encuentra en la gran empresa privada su base de sustentación económica y política.

Sea cual fuese el verdadero significado de la actitud del gobierno, lo cierto es que ésta no parece ser la más adecuada para solucionar o, al menos, suavizar la crisis nacional; más bien, puede conducir a su empeoramiento en la medida en que se profundicen las condiciones que le dieron paso.

Definitivamente, no hay alternativa viable para la superación de la crisis nacional mientras la guerra continúe y se profundice; y ésta continuará su avance mientras se continúe creyendo en la posibilidad de un triunfo militar y no se inicien, seria y responsablemente, alternativas políticas de solución al conflicto.

San Salvador, 7 de junio de 1985.